

LUIS ORLANDO VEGA
ABOGADO ESPECIALISTA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Señores:

HONORABLES MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL.

Atentamente: Magistrada Ponente Dra. GLORIA ESPERANZA MALAVER DE BONILLA
La ciudad,

REF.: PROCESO EJECUTIVO No. 2019-039-01

DEMANDANTE: PAOLA DURAN TRASPORTES SAS

DEMANDADA: MS. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS SAS

LUIS ORLANDO VEGA, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado civil y profesionalmente como a mi firma aparece, obrando como mandatario judicial de la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del C.G.P numeral tercero inciso segundo y ciñéndonos a lo establecido en el Decreto 820 del del 4 de junio del 2.020 Art. 14 en termino me permito hacer arribo a su digno despacho conforme a lo ordenado en la citada disposición procesal, para dejar sentada la sustentación del recurso de apelación a través de los reparos concretos que se le hacen a la sentencia que desato esta instancia, recursos que fuera interpuesto en la audiencia de juzgamiento, reparos concretos que a continuación se consignan

REPAROS CONCRETOS QUE SE HACEN A LA SENTENCIA:

Primer reparo.

INAPLICACIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD AL DESATAR LA INSTANCIA E INOBSERVANCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.

Sustento factico y jurídico:

1.- El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el "frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley", convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: **(i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad**. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero. Bajo los principios de la nueva Constitución se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. Ahora bien, "no se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material". De esta manera, aunque no sea posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué es la verdad y si esta es siquiera alcanzable, jurídicamente "la aproximación a la verdad es un fin, un principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades y a los particulares". Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República como los primeros llamados

Carrera 23 No 7-66 Of. 201/202 Edificio las Vegas. Yopal Casanare
Calle 28 N°13º-24 Ofic 504. Edificio Parque Central Bavaria. Bogota
Abogadosyopal2@hotmail.com

LUIS ORLANDO VEGA
ABOGADO ESPECIALISTA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, y con ello la realización de la justicia material.
Sentencia SU768/14

Descendiendo al caso concreto bajo estos parámetros podemos decir sin lugar a dudas que antes que la forma está el derecho sustancial y acá en este asunto están debidamente probados dos aspectos fundamentales que son específicamente determinantes en la obligación demandada, uno que el precio acordado por los extremos de la relación jurídico sustancial, en el contrato fue la suma de 800 Millones de pesos M/L. así quedo probado y demostrado palmariamente y dos que con relación a dicha suma no hay prueba alguna que demuestre el pago luego la sentencia que se ha dictado no obedece a los postulados de una verdadera justicia que es la que reclama el ciudadano de un estado social de derecho independientemente de a quien se le deba el dinero lo cierto es que el terreno no se ha pagado y lo que se avizora en la sentencia específicamente en lo relacionado al aparente pago parcial en la suma de 100 millones de pesos tal forma de pago no está debidamente probada dentro del expediente, si partimos de una verdad debidamente probada y es que quienes pagaron los derechos notariales en la notaria segunda al correr la correspondiente escritura pública de venta de los dos bienes fue mi mandante, luego entonces surge de consiguiente la pregunta ¿si la demandada no tenía dinero para pagar sus propios derechos notariales como podría tener la suma de 100 millones de pesos para pagarlos este día en ese mismo acto en que se suscribe la correspondiente escritura pública de venta? situación que nos lleva a concluir sin ahondar demasiado en el tema que la juzgadora pese a haber encontrado demostrado y probado que el pagaré base de acción corresponde a una cifra de dinero legalmente debida y que es el que surge del valor o precio dado a los inmuebles y que sobre dicha suma ningún dinero ha pagado la demandada, el juzgado determina dándole a la demandada una no despreciable suma de CIENTO MILLONES DE PESOS que NO ha pagado adicional al llamado pago parcial surge otra pregunta si así hubiese sido que la demandada abonaría los 100 millones de pesos al precio pactado y atribuibles a las aparentes comisiones que no están demostradas ni probadas ¿porque extiende un pagare por la suma de \$800.000.000 y no por \$700.000.000 deduciendo los 100 millones que aparentemente ya habían sido causados? Lo cierto es que ese dinero no se ha pagado, dando como resultado una marcada injusticia y un acto alejado de la equidad, que contravienen los postulados de un equilibrio perfecto y la efectividad del derecho material, por lo que apoyados en estos argumentos se solicita revocar ese numeral segundo de la sentencia.

Segundo reparo.

SENTENCIA INCONGRUENTE PRODUCTO DE LA INAPLICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 280 Y 281 DEL C.G.P.

Sustento factico y jurídico:

El deber de congruencia de la sentencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes y el Fallo.

Carrera 23 No 7-66 Of. 201/202 Edificio las Vegas. Yopal Casanare
Calle 28 N°13º-24 Ofic 504. Edificio Parque Central Bavaria. Bogota
Abogadosyopai2@hotmail.com

LUIS ORLANDO VEGA
ABOGADO ESPECIALISTA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso.

*"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o **por objeto distinto al pretendido** en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.*

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión..."

Este es un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (*extra petita*) ni más de lo pedido (*ultra petita*); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad. Sin embargo, en el plano constitucional y, específicamente, en el marco de la acción de tutela, la apreciación del vicio de incongruencia atribuible a determinada acción u omisión judicial, no puede ejercerse con la intensidad y extensión que le son propias a la legislación civil (y que en esa misma medida puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria), pues lo que está en juego ahora, en sentido estricto, no es la revisión del proceso ordinario y la materia concreta sobre la que este versa (asunto que siempre será competencia del juez ordinario), sino la presunta violación de derechos fundamentales que se traducen en el desconocimiento de las garantías básicas de los sujetos que acuden a la administración de justicia, y que convierten a los actos judiciales en ejercicios arbitrarios e irrazonables de poder.

La incongruencia se presenta, entonces, cuando el juez decide el caso por fuera de las pretensiones o excepciones probadas (*extra petita*), o más allá de lo pedido (*ultra petita*), o cercenando lo que fue objeto de alegación y demostración (*citra petita*), como lo ha señalado la Corte:

*[Su] incumplimiento es de antaño inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (*ultra petita*); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (*mínima petita*); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (*extra petita*)... (SC1806, 25 feb. 2015, rad. n° 2000-00108-01).*

Adicionalmente, esta causal se configura en los eventos que la sentencia no guarda correlación con «las afirmaciones formuladas por las partes», puesto que «es obvio que el juez no puede hacer mérito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas»¹. De allí que «a la incongruencia se

LUIS ORLANDO VEGA
ABOGADO ESPECIALISTA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

puede llegar porque el juzgador se aparta de los extremos fácticos del debate» (CSJ, SC, 7 mar. 1997, rad. N° 4636).

Para el asunto en concreto claro resulta, que la sentencia es incongruente puesto que la sentenciadora fue más allá de lo pedido si se tiene en cuenta que la sentencia no guarda correlación entre lo probado y lo decidido y menos guarda correlación entre lo pretendido y lo resuelto al extender la Juzgadora la sentencia ordenando oficiar a la DIAN por aspectos que jamás fueron pedidos en el escenario judicial por las partes, pero tampoco fueron materia de pretensiones en ejercicio del derecho e acción y menos de excepciones en el ejercicio del derecho de contradicción, pero adicional el Juzgado de manera equivocada se extralimita declarando probado un pago parcial que no fue alegado por la parte ejecutada y concluyendo la existencia de unas aparentes comisiones fundadas en la analizada prueba indiciaria, cuando contrario a lo decidido al efectuar el silogismo jurídico existen otras pruebas que no fueron materia de reproche como por ejemplo el acta donde la demandada se obligaba a pagar la suma de 800 millones de pesos y cuando además de eso se allegaron las declaraciones de renta de la demandante y donde resulta claro y lógico que no se pudo declarar una suma de dinero que no ha entrado a las arcas de la empresa demandante, como para tratar de concluir una aparente evasión de impuestos que no ha sido materia de pedimento en este escenario judicial, desbordando así la facultad oficiosa y concluyendo con unas decisiones que no se compadecen con el principio procesal de la congruencia, siendo que la misma debe obedecer a la adecuada correlación o armonía entre las pretensiones invocadas por las partes. Por ende en realidad, por su puesto respetamos las decisiones judiciales pero es esta oportunidad con todo respeto nos apartamos especialmente en esos dos aspectos sobre los que rece la censura rogando así de esta manera al Superior Jerárquico revoque la sentencia frente a los dos numerales atacados esto es segundo de la sentencia que declaro probado el pago parcial de 100 millones de pesos y el cuarto que ordena oficiar a la Dian en lo que tiene que ver con mi mandante, reitero no existe ni por asomo, una sola prueba del aparente pago, púes un formalismo que se exige en la notaria no puede suplir ni probar el aparente pago que se reitera no está debidamente probado en el expediente pero tampoco el pago parcial fue materia de excepciones de manera que el juzgado en un acto en realidad involuntario erro y de esta manera inaplico el contenido de los artículos 280 y 281 del C.G. P. Por lo que rogamos revocar en este sentido la sentencia en lo que hace referencia a la impugnación.

Atentamente,


LUIS ORLANDO VEGA
C. C. No 9.520.542 de Sogamoso
T. P. No 60.178 del C. S. de la Jud.